

Inclusión laboral de los desmovilizados del conflicto armado en Colombia

Laura Andrea Cristancho¹
lacristancho@unisalle.edu.co

Adriana Otálora Buitrago²
aotalora@unisalle.edu.co

Resumen: El presente artículo tiene como objetivo primordial analizar la inclusión laboral de los desmovilizados del conflicto armado en Colombia, a partir de los acuerdos de paz que se han firmado en los últimos gobiernos con dos de los grandes grupos al margen de la ley en Colombia. En primer lugar, se expone un panorama general de la violencia en el país. En segundo lugar, se presentan algunas características de la economía colombiana y los procesos de reinserción a la vida civil de los excombatientes. Luego, se describe el proceso de vinculación laboral de los excombatientes desde dos perspectivas, la incorporación en empresas y, la formación de empresa. Finalmente, se expone la situación de empleo y desempleo de la población de interés.

Palabras clave: Inclusión laboral, desmovilizados, conflicto armado, excombatientes.

Abstract: The main objective of this article is to analyse the labour inclusion of demobilized people in the armed conflict in Colombia, based on the peace agreements that were signed in past governments with two of the large illegal groups in Colombia. First, a general description of the violence in the country is presented. Secondly, some characteristics of the Colombian economy and the ex-combatants' reinsertion processes in civilian life. Then, it describes the process of ex-combatants' connection with working life from two perspectives, the incor-

¹ Profesora/investigadora, doctoranda en Análisis de Problemas Sociales, Mtr. en Economía y economista. Docente-investigadora de la Universidad de La Salle, Bogotá, Colombia. correo electrónico: lacristancho@unisalle.edu.co ORCID: 0000-0002-6273-7863

² Profesora/investigadora, doctora en Estudios Políticos, M. C. Educación y Desarrollo Humano, economista y politóloga. Docente-investigadora de la Universidad de La Salle, Bogotá, Colombia. correo electrónico: aotalora@unisalle.edu.co ORCID: 0000-0002-8594-9412

poration into companies and, on the other hand, formation of companies. Finally, the situation of employment and unemployment of the population of interest is explained.

Keywords: Labor inclusion, demobilized, armed conflict, ex-combatants.

Colombia atraviesa un momento crucial en su historia, dados los recientes acuerdos de paz firmados por los últimos Gobiernos de Álvaro Uribe Vélez y Juan Manuel Santos con dos grandes grupos armados ilegales. Los integrantes de estos grupos que se unieron al proceso de paz deben pasar por un proceso de desarme, desmovilización y reintegración (DDR) liderado por la Agencia Colombiana para la Reintegración (ACR), que sigue orientaciones del Ministerio de Defensa y de Justicia y de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz (Sepúlveda, 2014).

Ahora bien, la existencia de una institucionalidad definida es relevante para el éxito del proceso, sin embargo, no debe olvidarse que a lo largo de su historia Colombia ha afrontado una serie de hechos violentos tales como masacres, asesinatos selectivos, secuestros, desapariciones, reclutamiento, desplazamientos forzados, atentados terroristas y destrucción de su infraestructura (GMH, 2013). Los conflictos armados se incrementaron de manera especial desde la década de los años cincuenta, momento en el que surgen conflictos armados que aún se mantienen vigentes (Pardo Rueda, 2008). Es a partir de ese momento que se inician procesos de DDR³ de personas pertenecientes a algunos grupos armados al margen de la ley, en aras de posibilitar la convivencia pacífica y la reconstrucción del tejido social del país.

Los primeros momentos de DDR se dan en el marco de estrategias de uso de la fuerza y debilitamiento de los grupos armados; en términos de política pública, es a partir de la década de los noventa que se inicia un análisis de la violencia, el cual supera el concepto tradicional y realista de la seguridad. Así, se estructuran propuestas de intervención en la realidad social, tratando de dar respuesta al traslape entre la violencia de tipo económico, político y social (Moser, 1999) como una estrategia de fortalecimiento de capital social y construcción de una paz sostenible⁴.

Como respuesta a tal nivel de complejidad, los procesos de DDR hacen parte de una «aproximación multidimensional de la construcción de la paz en el postconflicto, de la reconstrucción, y pueden contribuir a mayor seguridad» (Contraloría General de la República, 2014, p. 4). Antes de los noventa, los armisticios respondían exclusivamente a la necesidad de dar soporte jurídico a la dejación de armas tras los procesos de negociación y de la firma de acuerdos de paz; sin embargo, con posterioridad a tal fecha, los

³ El proceso de desarme, desmovilización y reintegración mencionado al comienzo del artículo.

⁴ La complejidad del conflicto colombiano ha radicado no únicamente en la multiplicidad de actores (diversos grupos guerrilleros de corrientes ideológicas divergentes, grupos de autodefensas o paramilitares, acciones ilegales desde la misma fuerza pública; sino que además surgen de las profundas inequidades en el acceso al poder y los recursos económicos, dando como resultado un conflicto sostenible y la difícil consecución de condiciones para la paz.

gobiernos han estructurado programas orientados a que los desmovilizados puedan reintegrarse de forma digna a la vida civil.

El carácter multidimensional de la paz implica el reconocimiento de los factores estructurales y culturales que configuran la violencia, así como la intervención en los mismos. Siguiendo a Galtung (2001), la violencia directa y visible (asesinatos, secuestros, desplazamiento forzado, masacres, etc.) es la manifestación de la violencia invisible en sus dimensiones estructural (intrínseca a los sistemas sociales) y cultural (ideología, religión, cultura que legitiman los otros dos tipos de violencia) existentes en una sociedad determinada; así, solo atacando estas dos últimas podría alcanzarse una solución a la violencia directa.

FIGURA 1
Triángulo de la violencia según Johan Galtung



Fuente: elaboración propia con base en Galtung (2001)

Valga decir que existe una relación directa entre factores de violencia estructural como la pobreza y la mayor recurrencia de los conflictos armados (Calderon Concha, 2009), relación que resulta evidente en el caso colombiano, donde la violencia cultural se encuentra más arraigada en estos mismos contextos dada la prevalencia de una cultura patriarcal, excluyente y jerárquica en las sociedades rurales latinoamericanas; al mis-

mo tiempo, la estructura misma de la guerra fomenta este tipo de relaciones, sirviendo como justificación y naturalización de la violencia misma (Theidon, 2003). Incluso, algunos autores señalan cómo para el caso colombiano, la dificultad de superar el conflicto a través de los referentes culturales aprendidos y afianzados durante la guerra tiene como efecto la promoción de un «anticapital social» (Nussio y Ben, 2014).

Por tal razón, los procesos de DDR son acompañados de medidas complementarias para consolidar la paz en el territorio, atacando todos los tipos de violencia; esto implica tanto la inversión pública en los territorios como el acompañamiento de la población más vulnerable en la creación de capacidades, en la promoción de una cultura de paz y en la convivencia armónica. En este contexto, la población excombatiente debe involucrarse en los procesos de construcción de paz a partir de la transformación de sus opciones de vida (en lo educativo, lo social y lo laboral) en aras de una adecuada inclusión en la sociedad receptora, la cual a su vez se encuentra también en un proceso de construcción de paz. Así las cosas, el proceso de negociación de los acuerdos si bien es un primer paso indispensable, no garantiza la paz por sí mismo.

El proceso de reincorporación a la vida civil se caracteriza, entre otras, por las dificultades propias de la relación social, que son profundizadas por representaciones sociales divergentes de lado y lado. Tal situación resulta más significativa en el caso de conflictos multiactores como el colombiano, toda vez que las lógicas de la guerra y los enfrentamientos entre distintos grupos armados tienden a reproducirse en los procesos de reintegración a la vida civil.

Los excombatientes en proceso de reintegración traen consigo una serie de características que los hace blanco de discriminación social, producto del estigma social impuesto por haber pertenecido a un grupo armado ilegal. Ervin Goffman (1970), en su libro *la identidad deteriorada*, identifica tres tipos de estigmas sociales: los corporales, los defectos de carácter y los tribales (raza, nación y religión). Los excombatientes son ubicados en el segundo estigma (de carácter), caracterizado por no ser visible a primera vista; sin embargo, quien sufre este estigma es rechazado por su entorno una vez se conoce su condición (Sepúlveda, 2014, p. 47). Además, al igual que las víctimas de la violencia sociopolítica, los excombatientes sufren también el señalamiento (GMH, 2013), lo que dificulta su proceso de reintegración en la sociedad receptora, en particular en cuanto a su inclusión laboral se refiere. La sombra del estrés postraumático es acompañada por la difícil relación en una sociedad ideológicamente dividida.

Con el objetivo de mitigar las consecuencias del estigma y el señalamiento, el Gobierno, a través de la ACR, diseñó una ruta de reintegración de ocho dimensiones (personal, seguridad, educativa, productividad, salud, ciudadana, familiar y hábitat) que, a manera de pasos, deben seguir el desmovilizado y su familia con el objetivo de construir

su proyecto de vida, garantizando su reintegración en la vida civil y económica; alejados de la lucha armada y en pleno goce de sus derechos como ciudadanos colombianos.

En este artículo se analizan las dinámicas de inserción laboral de participantes en procesos de reintegración llevados a cabo entre los años 2002 y 2016; procesos en los que participaron excombatientes en su mayoría de las AUC⁵, proceso que, al encontrarse finalizado, nos brinda aprendizajes para futuras experiencias de reintegración como implican las desmovilizaciones de las FARC⁶ y el proceso en curso con el ELN⁷.

LA ECONOMÍA COLOMBIANA Y LOS PROCESOS DE REINSERCIÓN A LA VIDA CIVIL

En la década de los sesenta, momento en el que se da un auge en la conformación de grupos armados al margen de la ley como las FARC y el ELN, en términos económicos el país tuvo una escasez de divisas y, como consecuencia, se desató una devaluación en 1962. Como respuesta a la situación económica, el Banco de la República salió a comprar divisas, con lo cual se aumentó la cantidad de moneda circulante en la economía, hecho que desató una inflación del 32,56% en 1963. Este período se caracterizó por una fuerte influencia del sector externo, de las devaluaciones y las revaluaciones y, al mismo tiempo, aumentos de la oferta de dinero por parte del Banco de la República para financiar el déficit del Gobierno y el aumento de las reservas internacionales, lo cual finalmente se reflejó en un aumento de la demanda agregada y, por ende, de los precios (Montealegre y Ochoa, 2005).

La economía colombiana hacia los años ochenta presentó una escasa diversificación de los productos de exportación, sumada a la dependencia del café como fuente principal de moneda extranjera. En este contexto, el Gobierno ve la necesidad de formular una serie de medidas encaminadas a promover exportaciones de otros productos con mayor valor agregado que permitan diversificar la fuente de divisas. Como resultado de la política de diversificación de exportaciones, el PIB se multiplicó por cuatro durante la segunda mitad del siglo xx. En contraste, el gasto público no creció en igual medida que

⁵ AUC: Autodefensas Unidas por Colombia. Organización paramilitar de autodefensa de extrema derecha, que participó en el conflicto armado en Colombia.

⁶ Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo o FARC-EP fue un grupo guerrillero de izquierda colombiano.

⁷ El Ejército de Liberación Nacional ELN es una organización guerrillera insurgente que opera en la actualidad en Colombia.

el crecimiento económico. Así mismo, la economía colombiana mantuvo niveles de inflación altos pero controlados hasta 1970, año en que la inflación alcanzó el 36%.

La inestabilidad en el plano fiscal tuvo como consecuencia la escasa inversión pública, sobre todo en el sector rural, siendo este precisamente el territorio en el que se gestaron y fortalecieron los grupos insurgentes⁸. Se profundiza así la brecha entre los sectores rural y urbano colombianos, no solo en materia de infraestructura económica, sino de institucionalidad estatal. En otras palabras, se sientan las bases de un abandono estatal reiterado que profundizó aún más las raíces del conflicto interno colombiano.

Por su parte, los antecedentes de DDR se remontan a 1952, año en el que se da la desmovilización de los primeros comandos guerrilleros, con el consecuente retorno de los campesinos a sus tierras; aun así, este proceso de desmovilización no alcanza un desarme juicioso ni mucho menos un proceso de reintegración, toda vez que las tierras de retorno habían ya sido ocupadas por terratenientes, quienes expulsaron a los retornantes de manera violenta, lo cual significó una nueva simiente al conflicto que supera las fronteras del siglo xx.

La fuerte crisis latinoamericana de los años setenta no se reflejó directamente en Colombia, dada la magnitud de la economía subterránea, la cual inyectó recursos a la economía nacional. La economía de la década de los setenta mantuvo un crecimiento del 5% promedio anual que, aunque fue positivo, no le permitió al país alcanzar el nivel de desarrollo esperado. Al mismo tiempo, la expansión del narcotráfico alcanzó la actuación de los grupos insurgentes, lo que propició su fortalecimiento económico y militar y sumó otra variable al ya complejo conflicto armado colombiano.

La ausencia de un acompañamiento adecuado al proceso se hace recurrente cuando la Ley 35 de 1982 permitió la amnistía para guerrilleros pertenecientes a los grupos del M-19⁹, FARC y EPL, fuesen estos autores, cómplices o encubridores de hechos constitutivos de delitos políticos; algo que dio un giro histórico en el manejo del conflicto al otorgar un reconocimiento político a los grupos guerrilleros participantes en los diálogos de paz (Chernick, 1996, p. 5). Sin embargo, la aplicación de esta ley se ve terminada por los hechos ocurridos durante la toma del Palacio de Justicia¹⁰ por parte del M-19 el 6 de noviembre de 1985 (Giraldo, 2010, p. 38).

⁸ Es así como los grupos insurgentes aprovechan la ausencia del Estado para fortalecer e incrementar su actuación bélica bajo la lógica de una guerra de guerrillas.

⁹ El Movimiento 19 de abril, grupo revolucionario colombiano del siglo xx.

¹⁰ Hecho relevante en la historia colombiana en el que fueron tomados rehenes. El ejército nacional ingresó al recinto con armas y dispersó la toma del recinto público.

Como parte del mismo proceso se instaura el Plan Nacional de Rehabilitación¹¹, encargado de la focalización de inversiones públicas en las zonas más afectadas por el conflicto armado. Aun así, se sientan las bases para el retorno a la ilegalidad de algunos de los desmovilizados, dada la ausencia de garantías de seguridad y las consecuentes amenazas, seguimientos y asesinatos selectivos a los líderes de movimientos sociales (Villarraga, 2013, p. 115). Se pretendía de esta manera dar solución a parte de los factores estructurales de la violencia; sin embargo, al no atacar elementos socioculturales como el estigma de haber pertenecido a un grupo armado, se sientan las bases para el consecuente incremento de hechos de criminalidad y violencia en el país, a las que se aúna el surgimiento de fenómenos como el narcotráfico (Chernick, 1996, p. 5).

En 1989 se lleva a cabo la desmovilización colectiva y la reinserción a la legalidad de uno de los grupos guerrilleros más reconocidos de los noventa: el M-19, el cual se desmoviliza como grupo armado a través del Acuerdo político del 9 de marzo de 1990 para la desmovilización, entrega de armas y reincorporación a la vida civil. Como resultado de estos acuerdos se propicia la participación de la Alianza Democrática M-19¹² en la Asamblea Nacional constituyente de 1991 (Romero y Gardezabal, 2010, p. 13).

Distintas estrategias fueron implementadas desde la década de los noventa, incluidos los procesos de descentralización y mayor presencia del Estado en los territorios afectados por el conflicto, además del despeje de una amplia zona del país para llevar a cabo los infructuosos diálogos de paz entre 1999 y 2002.

Colombia, para la última década del siglo xx, buscó entrar en el proceso de globalización mundial a través de una serie de medidas denominadas *apertura económica*. Como respuesta a tales medidas, el comportamiento de algunos indicadores macroeconómicos fue positivo, como la reducción de la inflación a un dígito y la reducción de los índices de desempleo. Sin embargo, otros indicadores relevantes para la economía colombiana se comportaron negativamente; así, el nivel general de precios se elevó, lo que desató una pérdida de poder adquisitivo y una caída importante de la producción nacional señalados por el Departamento Nacional de Estadística colombiano (DANE) para 1999. (Montealegre & Ochoa, 2005).

¹¹ Decreto 2707 de 1993. El Plan Nacional de Rehabilitación (PNR) es un programa de la Presidencia de la República de la política de paz y normalización de zonas afectadas por desequilibrios del desarrollo, debilidad en la presencia institucional del Estado y conflictos sociales. Su objetivo central es generar ámbitos para la convivencia pacífica entre los colombianos a través de las acciones necesarias para contribuir al proceso de reconciliación nacional y poner en práctica mecanismos que permitan establecer una relación armónica y duradera entre el Estado y la población y entre los diversos sectores y grupos que conforman la sociedad civil.

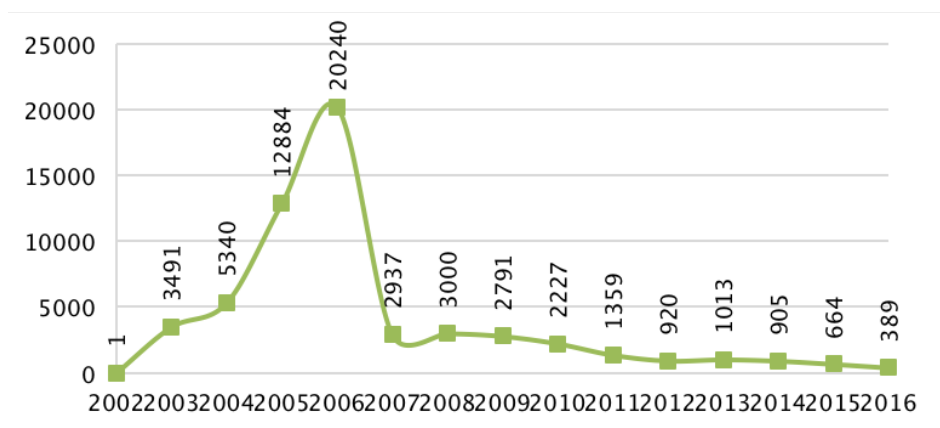
¹² Partido constituido por los excombatientes del grupo antes llamado M-19.

El primer decenio del siglo XXI fue positivo para el crecimiento del país, el PIB mantuvo tasas de crecimiento positivas; los primeros dos años, la economía colombiana registró ritmos de crecimiento moderados, observándose una aceleración de la economía entre 2003 y 2007, años en los que el PIB logró los máximos niveles de crecimiento de la década, cercanos al 7%. Sin embargo, la crisis internacional del año 2008 afectó la economía interna, momento en que el país experimentó un bajo crecimiento económico, casi nulo en 2009. Aun así, la tasa de inflación entre 2001 y 2006 se redujo, pasando de 7,6% a 4,5%, e inició una tendencia al alza entre 2007 y 2008, alcanzando un nivel de 7,6%, el que finalmente el emisor logró controlar para el año 2009 con niveles de 2%, la menor inflación de la década (Ministerio de Protección Social, 2010).

En el plano de seguridad se da un cambio significativo en la orientación de la política de paz durante los Gobiernos de Álvaro Uribe Vélez (2002-2010), centrada en el combate militar a los grupos insurgentes, con el consecuente incremento de las desmovilizaciones individuales de los grupos guerrilleros, así como en la desmovilización colectiva y desarme de gran parte de las AUC o grupos paramilitares.

Así, en el año 2002, el Ministerio de Interior y de Justicia colombiano consolidó un programa dirigido a la reintegración y reincorporación a la vida civil, formado para atender las necesidades de miles de colombianos combatientes ilegales que se desmovilizaron a partir de la política de seguridad democrática y defensa del Gobierno Uribe, promulgada en este mismo año. Este proceso de DDR buscó desintegrar todos los grupos armados ilegales en Colombia a través de la desmovilización individual o colectiva, y ha tenido como resultado alrededor de 57000 desmovilizaciones entre 2002 y 2016 (gráfico 1). (Naeve, 2012).

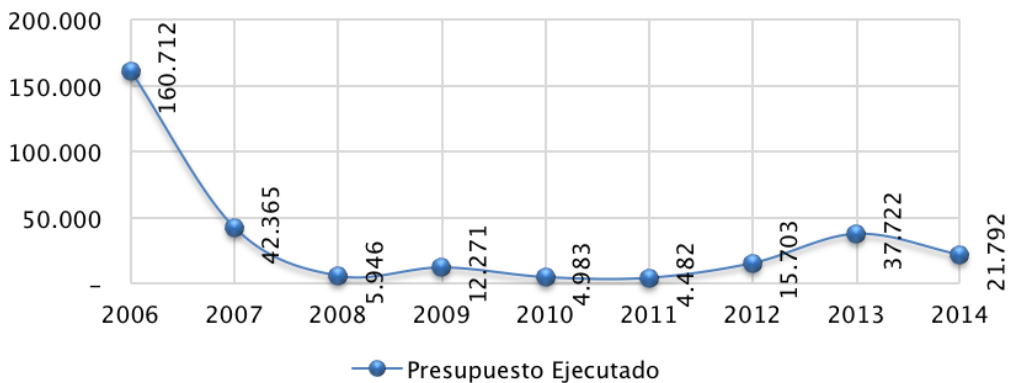
GRÁFICO 1
Histórico de población desmovilizada 2002-2016



Fuente: Agencia Colombiana para la Reintegración, 2016. Elaboración propia

El Programa de Reintegración y Reincorporación a la vida civil buscó proporcionar atención individualizada a los excombatientes a partir de una atención especial centrada en sus necesidades psicológicas, educativas y económicas. Sin embargo, la proporción y el alcance de las desmovilizaciones tanto colectivas como individuales era cada vez más grande, por lo que el Gobierno de Colombia consideró necesario proporcionar recursos y asistencia a las comunidades en las que los excombatientes estaban retornando, para la garantía de un proceso exitoso y sostenible.

GRÁFICO 2
Presupuesto ejecutado fondo de paz 2004-2014



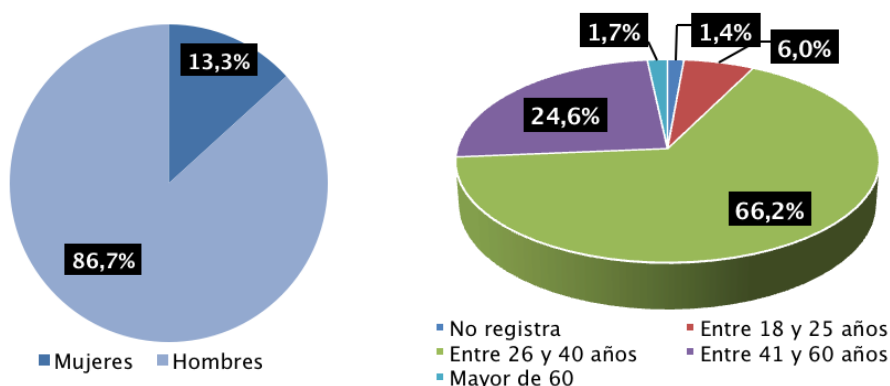
Fuente: fondo de paz. Ejecución con corte junio de 2014. Elaboración propia

Durante el período 2006-2014 fueron ejecutados \$305.976 millones (gráfico 2) para efectuar desmovilizaciones colectivas y adelantar diálogos y negociaciones con grupos armados organizados al margen de la ley (Contraloría General de la República, 2014).

El 15 de julio del año 2003 se da inicio en Colombia al proceso de negociación con los grupos paramilitares, proceso en el que se logra la desmovilización colectiva de 38 estructuras armadas que entregaron 18 051 armas correspondientes a 31 671 miembros integrantes, de los cuales el 6% eran mujeres (Alonso y Valencia, 2008, p. 15). Es en ese mismo momento en que se vincula el término reintegración a este tipo de procesos, haciendo referencia al proceso de retorno y nuevo engranaje de los desmovilizados a la sociedad civil, distinto al proceso mediante el cual se dan la desmovilización y la dejación de armas, es decir, más allá de la reinserción o la reincorporación.

GRÁFICO 3

Población desmovilizada por grupo etario y género 2002-2016



Fuente: Agencia Colombiana para la Reintegración, 2016. Elaboración propia

Los desmovilizados pertenecían a diferentes grupos armados ilegales, de los cuales el 86,7% son hombres (42 807 personas), el 13,3% restante son mujeres (6 547 personas) y más de la mitad de estas personas tienen entre 26 y 40 años de edad (el 66,2%): por lo tanto, forman parte de la población en edad de trabajar (PET)¹³ y muchos de ellos ahora son parte de la población económicamente activa (PEA)¹⁴, es decir, de la mano de obra productiva del país (gráfico 3). El Departamento Nacional de Planeación (2017) afirmó que el 49,9% de los desempleados en el país son menores de 29 años, es decir, de cada dos colombianos que no tienen trabajo, uno es un joven. Lo anterior se relaciona con un problema estructural del mercado laboral colombiano, que obliga a muchos jóvenes que no logran incorporarse a un empleo formal a buscar otras formas de generar ingresos informales y, en algunos casos, ilegales; esta es la problemática que enfrenta este grupo mayoritario de excombatientes sumado a su condición de bajos niveles de capacitación (Departamento Nacional de Planeación, 2016).

Esta realidad da cuenta además del capital humano que se ha estado perdiendo en el conflicto armado, el cual bien podría aprovecharse como impulso a la productividad nacional, si es que se logra la culminación exitosa del proceso por la mayoría de los participantes. Se requiere, por tanto, la generación de opciones claras y sostenibles de

¹³ Población en edad de trabajar (PET): está constituida por las personas de doce y más años en la parte urbana, y de diez años y más en la parte rural (DANE).

¹⁴ Población económicamente activa (PEA): también se llama fuerza laboral y son las personas en edad de trabajar, que trabajan o están buscando empleo (DANE).

vinculación laboral de esta población para que el afianzamiento de sus capacidades laborales derive en mayor seguridad económica y calidad de vida. Al mismo tiempo constituye un reto aún mayor para los procesos de DDR, que ha sido asumido de manera proactiva a partir del enfoque actual de reintegración, descrito a continuación.

La vinculación laboral de los desmovilizados desde la reintegración

En los procesos de DDR¹⁵, la desmovilización implica el abandono de los grupos insurgentes, sea esta individual o colectiva. El desarme pretende reducir el número de armas que poseen los grupos insurgentes y sus integrantes, las cuales pueden ser destinadas a nuevas confrontaciones armadas; se asegura así el cambio en la forma de solucionar los conflictos de quienes hacen parte de un proceso de desmovilización. La reintegración comprende el proceso a través del cual los excombatientes desmovilizados, una vez se ha dado la dejación de armas, retornan a la vida civil y a la convivencia social, recuperando sus derechos y deberes como ciudadanos. Así, el individuo sujeto de la reintegración o reincorporación a la vida civil deberá sujetarse a las normas sociales y jurídicas de convivencia, al tiempo que vuelve a ser sujeto pleno de derechos políticos, económicos y sociales. En este particular Alonso y Valencia (2008, p. 13) señalan que las acciones del Estado suelen centrarse en lo económico y social, siendo el ámbito local el de principal intervención.

A partir de tal enfoque, la ACR¹⁶ se encarga de:

- Perfiles diferenciados de los desmovilizados.
- Acompañamiento psicosocial, en salud, educación y condiciones de reintegración.
- Regionalización con objetivos de capacitación laboral, apoyo a pequeños proyectos de negocios individuales o colectivos.

Para las personas que ingresan al proceso de reintegración, la ACR ha creado unos estados que describen su situación y alcance de los beneficios, el cumplimiento de asistencias y su estatus jurídico según la normatividad vigente y comprende los siguientes grupos:

¹⁵ El Proceso de Desarme, Desmovilización y Reintegración mencionado al comienzo del artículo.

¹⁶ Agencia Colombiana para la Reintegración.

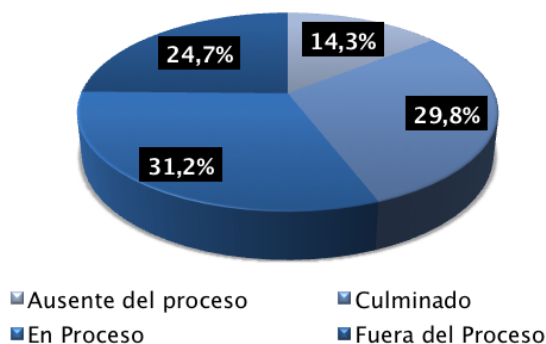
TABLA 1
Estados de los desmovilizados en Colombia.

Estado	Descripción
Población en proceso de reintegración	Son las personas desmovilizadas que la ACR atiende permanentemente y que están cumpliendo con su ruta de reintegración. Existe una población activa , que son personas que han asistido a las actividades de su ruta de reintegración; una población inactiva , que ha faltado al menos a alguna de las actividades programadas y, finalmente, los que terminaron componentes , que son los que ya tomaron todas las actividades (formación académica, formación para el trabajo, gestión en salud y acompañamiento psicosocial) y están vinculados a una acción de servicio social.
Población ausente del proceso	Son los desmovilizados que en algún momento ingresaron al proceso de reintegración, pero han tenido inasistencias en su ruta por un período de seis meses o más.
Población fuera del proceso	Son los desmovilizados que salieron del proceso de reintegración y sus beneficios, los que lo culminaron y los que fallecieron.
Personas que no han ingresado al proceso	Corresponde a la población desmovilizada certificada por el Comité Operativo de Dejación de Armas (CODA) que aún no ha comenzado el proceso de reintegración.

Fuente: Agencia Colombiana para la Reintegración, 2016. Elaboración propia

De acuerdo con su estado, el 31,2% de la población desmovilizada se encuentra en proceso de reintegración (15 399 personas), el 14,3% en el estado ausente, el 24,7% fuera del proceso (12 191) y el 29,8% ha culminado su proceso (14 697 personas) y se encuentran reintegradas nuevamente a la sociedad (gráfico 4).

GRÁFICO 4
Población desmovilizada de acuerdo a su estado. 2016



Fuente: Anuario de la ACR 2016. Elaboración propia

Si bien no existe una evaluación precisa del éxito del proceso de DDR, resulta preocupante que a 2016 el 39% de los participantes se encontraran ausentes (14,3%) o fuera del proceso (24,7%); resulta también lesivo el haber iniciado un proceso que no se culmina de manera adecuada: tal realidad propicia una sensación de fracaso en los excombatientes y, en ocasiones, sentimientos de rechazo por parte de la sociedad.

Por otra parte, se debe destacar que los ciudadanos desmovilizados ya reintegrados (29,8%) han atravesado de manera exitosa el proceso, lo que implica el cambio en sus representaciones sociales, el establecimiento de un plan de vida y el disfrute de las condiciones básicas de vida que les permite hacerse parte activa de la sociedad. Son 14 697 vidas que se le han arrebatado a la violencia, y ciudadanos activos que se suman a la construcción de sociedad.

Son estos procesos difíciles y de largo plazo, toda vez que Suárez, Patiño y Aguirre (2013), señalan cómo, después de la desmovilización, se mantienen las pugnas de la guerra, así las representaciones sociales de los excombatientes frente a sus antiguos enemigos giran de manera prioritaria en torno al desprecio, el temor, la zozobra y la maldad. De allí la dificultad para lograr una adecuada reintegración, dado que las prácticas a las que los excombatientes se encontraban habituados son prácticas excluyentes y jerárquicas que privilegian la confrontación y la violencia como mecanismos de solución de conflictos (Theidon, 2003).

Así, su adecuado retorno a la civilidad implica la transformación de su subjetividad y la generación y promoción de nuevas capacidades, formuladas desde una lógica que privilegie la convivencia y, finalmente, la aceptación de los reintegrados por parte del resto de la sociedad. Es por tal razón fundamental generar espacios de interacción entre los excombatientes y la sociedad receptora que propicien la transformación de sus subjetividades; en este sentido el mundo laboral es uno de los escenarios más propicios, toda vez que relacionarse gira en torno al ejercicio de las capacidades de los ciudadanos reintegrados.

En tal proceso se contemplan ocho dimensiones en la ruta de reintegración:

TABLA 2
Dimensiones de la ruta de reintegración

DIMENSIÓN	CARACTERÍSTICAS
Seguridad	Se pretende evitar la victimización y reincidencia de los desmovilizados a través de la apropiación de habilidades para el manejo asertivo y la identificación de situaciones de riesgo, así como el conocimiento suficiente de los mecanismos institucionales para solicitar protección en caso de ser necesario.

TABLA 2
Dimensiones de la ruta de reintegración (cont.)

DIMENSIÓN	CARACTERÍSTICAS
Personal	En esta dimensión se propende por el bienestar psicosocial de los individuos reincorporados, tanto a nivel individual (salud mental) como colectivo (relaciones sociales). En este punto se incluye la resignificación de los relatos de los participantes hacia una orientación positiva en la que establecer relaciones seguras, estables y que les aporten bienestar.
Ciudadana	Esta dimensión promueve el ejercicio de una ciudadanía activa por parte de individuos capaces de reconocerse como sujetos de derechos y evitar procesos de autoexclusión, y para asumir los principios democráticos con relación a las instituciones, los contextos comunitarios, la responsabilidad jurídica ante las autoridades y su contribución a la reconciliación.
Productiva	Más allá de la entrega de las ayudas de inserción económica, se centra en la generación de capacidades del desmovilizado y su familia para la generación de ingresos sostenibles acordes con sus potencialidades, la gestión de recursos productivos y el acceso y vinculación a productos que el sistema financiero le ofrezca en su entorno económico.
Educativa	En esa dimensión se promueve la adecuada valoración del acceso a la educación por parte del reintegrado y de su grupo familiar. Parte de los objetivos radican en el reconocimiento por parte de los adultos de los grupos familiares de la necesidad y conveniencia de que los miembros de su familia, en particular los menores de edad, alcancen niveles educativos acordes con un contexto que exige el desarrollo de competencias básicas, bilingüismo y manejo de nuevas tecnologías de la información que posibiliten su acceso y permanencia en entornos productivos.
Familiar	Se centra en dinamizar las relaciones en el interior de la familia como factor protector de sus integrantes. Se tiende así a fortalecer los vínculos afectivos de los participantes con su entorno más cercano.
Salud	Consiste en la articulación de las acciones del consejo de reintegración con las de otras entidades para promover y desarrollar estilos de vida saludables en lo físico y mental de los excombatientes y sus familias. Lo anterior, al facilitar el acceso de los participantes al sistema de seguridad social y de salud, promueve así la salud y la prevención de la enfermedad del participante y de su grupo familiar.

TABLA 2
Dimensiones de la ruta de reintegración (cont.)

DIMENSIÓN	CARACTERÍSTICAS
Hábitat	En relación con el entorno, hace énfasis en la vivienda como un espacio de adecuada habitación. Así, se incluyen elementos tanto del conocimiento de los distintos mecanismos existentes para lograr acceso a vivienda, como la identificación de riesgos en la habitación y garantía de seguridad al interior de esta, incluida la seguridad alimentaria.

Fuente: elaboración propia con base en Contraloría General de la República, 2014 y Agencia Colombiana para la Reintegración, 2017

En términos de la inclusión laboral de los excombatientes desmovilizados resultan cruciales las dimensiones «educación» y «productiva», toda vez que es a partir de estas dos que se propicia un adecuado engranaje de estos individuos con sus empleadores a través de la generación de capacidades, garantizando una reintegración y no una mera reincorporación.

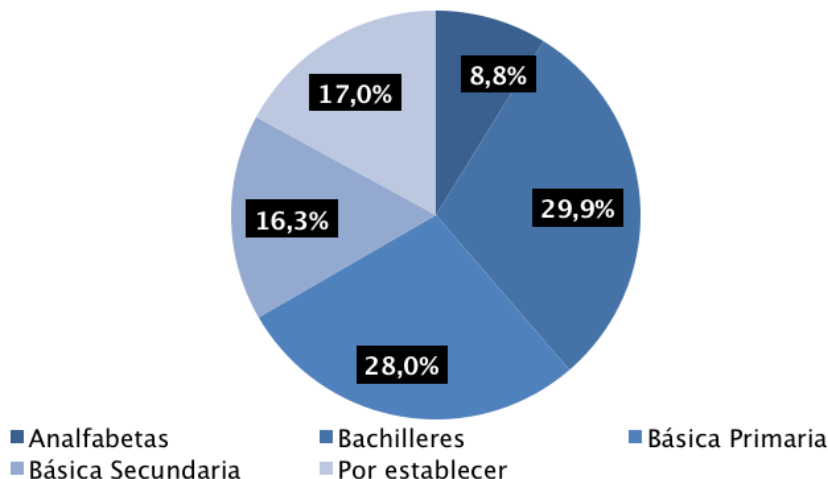
Como se señalaba en la tabla 2, la dimensión productiva de los programas de la ACR tiene como objetivo la generación de capacidades laborales en los individuos. Así, incluye cinco dimensiones:

- a. Oportunidades del contexto económico
- b. Fortalecimiento del talento
- c. Generación de ingresos
- d. Opciones productivas
- e. Familia y manejo financiero

Si bien la ACR garantiza la búsqueda de oportunidades laborales para los participantes de los programas de DDR, debe observarse que se incluyen elementos de educación financiera, conducentes a asegurar la acumulación de recursos que les suministren una adecuada seguridad económica. De igual manera, en cuanto a la generación de capacidades, la dimensión educativa juega un papel fundamental, al dotar a los excombatientes con habilidades que les permitan permanecer en el mercado laboral por sí mismos, en lo que constituye una verdadera inclusión laboral.

En lo que respecta al nivel de escolaridad (gráfico 5) en la población que ingresó al proceso de desmovilización entre 2002 y 2016, se identifica que solo el 29,9%, que corresponde a 14 735 personas, son bachilleres y, por otro lado, el 8,8%, que son 4 356

GRÁFICO 5
Población desmovilizada por nivel de escolaridad 2002-2016



Fuente: Agencia Colombiana para la Reintegración, 2016. Elaboración propia

personas, se consideran analfabetas, reflejo de la vulnerabilidad social de estos individuos y en coherencia con las violencias estructurales y culturales que los han hecho vulnerables. Tal situación permite evidenciar la necesidad de incorporar estos individuos en procesos educativos para adultos que les permitan obtener de manera rápida una formación, bien sea para el trabajo o para diseñar proyectos que les permitan formar empresa, con el fin de incorporarlos a una actividad productiva legal con un ingreso que satisfaga sus necesidades individuales y familiares.

Esta es una situación preocupante, especialmente si se tiene en cuenta que la dimensión educación hace énfasis en la toma de conciencia del valor de la educación y en el acceso educativo para los menores de edad, es decir, para las siguientes generaciones. En efecto, los resultados de (Kaplan y Nussio, 2016) señalan cómo factores relacionados con lazos familiares débiles y el bajo logro educativo se encuentran relacionados con una mayor probabilidad de que los excombatientes retomen las armas. Siendo así, no resultaría suficiente la validación de competencias laborales contemplada en la dimensión laboral, sino que se requiere una intervención estructural en las capacidades laborales de todos los integrantes de las familias de los excombatientes.

En efecto, según el Ministerio de Educación, los empresarios colombianos tienen en cuenta para emplear un individuo condiciones personales que se relacionan con competencias fundamentales, como el comportamiento ético y sus capacidades para comunicarse, el trabajo en equipo y el manejo de recursos e información. En síntesis, el desa-

rollo de las competencias laborales es la estructura fundamental de la construcción del proyecto de vida de los jóvenes colombianos (Ministerio de Educación Nacional, 2010).

Por su parte, la Alta Consejería Presidencial para el Posconflicto (2017) incluye a los empresarios del sector privado como actores importantes del proceso, dado que son ellos quienes pueden impulsar el desarrollo socioeconómico en los territorios más golpeados por la violencia a partir de dos objetivos:

- a. Contribuir a la descentralización y diversificación económica del país
- b. Apoyar en la rehabilitación socioeconómica y de infraestructura

En esta línea, se pretende motivar la creación de empresas formales que tengan en cuenta las vocaciones productivas regionales y las competencias de la población; así mismo, promover la construcción de proyectos tanto sociales como de infraestructura.

Es de señalar que los procesos de reincorporación a la vida civil dependen en buena parte de la articulación entre las estrategias gubernamentales y las iniciativas del sector privado; en este sentido, son los empresarios quienes tienen la opción de propiciar espacios adecuados para superar los obstáculos estructurales y culturales que se constituyen como violencia y que deben ser superados en la construcción de paz —desde la perspectiva de Galtung—. En Colombia existen diversas experiencias de aporte del sector empresarial a la construcción de paz (Rettberg, 2007), los cuales dan cuenta de la necesidad de que su papel en las iniciativas de paz sea activo a través de estrategias como la vinculación laboral de los excombatientes.

FORMACIÓN PARA EL TRABAJO

De acuerdo con las dimensiones del proceso de reintegración, el individuo recibe formación psicosocial, académica y laboral a través del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), por su parte la ACR¹⁷ identifica las ofertas laborales disponibles para los perfiles existentes que, dadas las capacidades y alcance del SENA, son de carácter técnico y operativo; dentro de los que se encuentran cargos operativos y auxiliares, técnicos y tecnológicos. Por otro lado, se tienen en cuenta las aspiraciones de los desmovilizados y su proyecto de vida para sugerirle al participante cursos de formación.

¹⁷ Agencia Colombiana para la Reintegración.

FIGURA 2
Estrategias para la reintegración económica



Fuente: elaboración propia tomado de Sepúlveda, 2014

Los reintegrados pueden así acceder a «acciones de formación complementaria; programas de formación que conlleven un certificado de aptitud ocupacional (técnico laboral por competencias); programas de formación en los niveles operario o auxiliar que conlleven a una titulación; o programas de formación en los niveles de técnico, técnico profesional o tecnólogo» (Agencia Colombiana para la Reintegración, 2017).

Este tipo de formación, que resulta coherente con los niveles de educación antes señalados, se centra de manera exclusiva en habilidades de tipo operativo, actividad que es bajamente valorada en Colombia. Así un operario gana en promedio mensualmente \$679 646 (equivalente a €196), un técnico profesional \$1 041 927 (equivalente a €300,40), un tecnólogo \$1 113 635 (equivalente a €321,07), y un profesional \$1 736 849 (equivalente a €500,75). (Ministerio de Educación Nacional, 2014). El SENA propicia espacios de formación como técnicos profesionales y tecnólogos, el bajo nivel educativo con que ingresan los excombatientes a estos programas solo permite el acceso a un nivel operario, cuya remuneración es cercana a un SMMLV¹⁸.

Desde esta perspectiva, resulta fundamental la articulación entre los distintos niveles educativos a través de ciclos propedéuticos que permitan a los egresados de estos programas de formación su rápido salto a otros niveles educativos, de acuerdo con sus intereses y capacidades. A la vez, la validación y homologación de conocimientos previos a través de los programas por competencias, requieren una mayor flexibilidad que le permita a quienes se encuentran en proceso de reintegración, acceder a formación complementaria a la técnica, que garantice su acceso a futuro a mayores niveles de educación y remuneración.

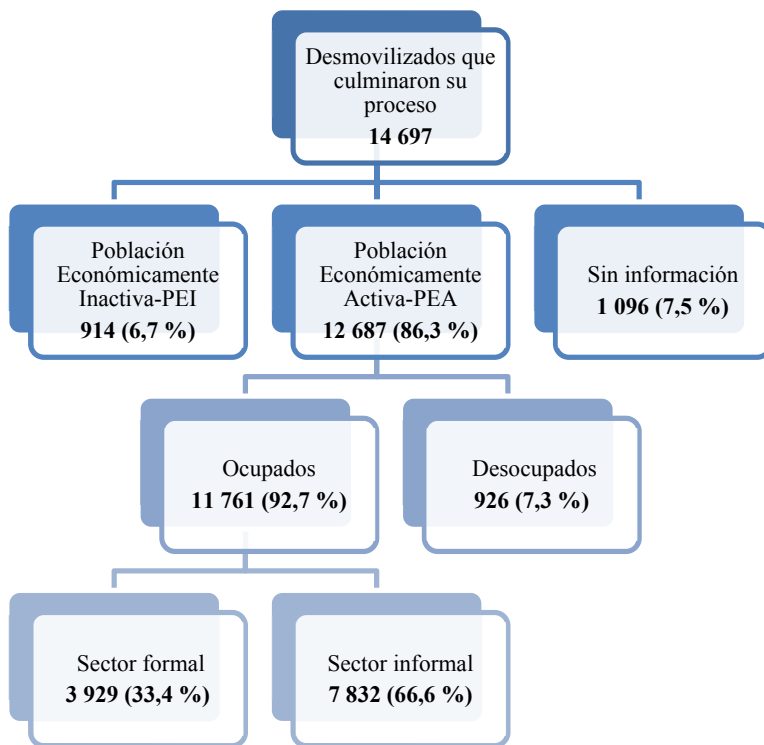
¹⁸ SMLV. Salario mínimo legal vigente en Colombia. Para el año 2017 el SMLV es de \$737 717, aproximadamente €233,2.

Parte de estas estrategias de formación apuntan a la generación de capacidades orientadas a la creación de negocios, buscando así la independencia económica de estos individuos. De ser exitosa, esta estrategia generaría espacios para la contribución de esta población a una mayor producción nacional. Aun así, esta es una alternativa que requiere la garantía de un capital semilla suficiente como para crear negocios productivos y sostenibles, aspectos que se tratarán más adelante.

Situación de empleo y desempleo de la población excombatiente

Los excombatientes y sus familias durante la ruta de reintegración obtienen servicios de salud, educación, seguridad y formación para el trabajo. Sin embargo, una vez culminan su proceso, comienzan su vida como cualquier otro ciudadano libre. En este

Figura 3
Vinculación económica de los desmovilizados. 2016



Fuente: Agencia Colombiana para la Reintegración, 2016. Elaboración propia

sentido, estos individuos se reintegran a la sociedad con un oficio que les permite incorporarse al mercado laboral o formar su propio negocio con el fin de generar un flujo de ingreso para su propio bienestar y el de su familia.

A partir de los 14 697 desmovilizados que han culminado su proceso de reinserción a la sociedad civil, la ACR ha realizado seguimiento a sus condiciones socioeconómicas para conocer su efecto sobre la calidad de vida de estas personas que finalmente se pusieron en manos del Estado para reintegrarse como ciudadanos libres e independientes.

La figura 3 permite evidenciar que la tasa de desempleo que enfrentan los excombatientes que ya culminaron su proceso es baja (del 7,3%) frente a la nacional, que este mismo año fue de 9,2% según el DANE. Sin embargo, los ocupados enfrentan una realidad, que es la dificultad que tienen para incorporarse al sector formal, lo que solo el 31% ha logrado, dejando el 60% restante en la informalidad, en contraste con la tasa de informalidad nacional que fue de 47,5%, lo que deja como evidencia que la sostenibilidad en la inclusión laboral de los excombatientes aún no se ha logrado en gran medida.

Al comenzar su ruta de reintegración, los excombatientes en su mayoría acceden a un trabajo informal que obtienen a través de amigos pertenecientes a sus círculos más cercanos, muchas veces excombatientes de los mismos grupos de los cuales se desmovilizaron, siendo uno de los sectores con una mayor incorporación de esta población el de la construcción, dado que no requiere mucha experiencia previa ni muchas referencias formales. Con el paso del tiempo, algunos logran incorporarse a trabajos administrativos, generalmente en las empresas del sector privado con que la ACR tiene convenios como el Grupo Éxito y la Fundación Carvajal entre otras. Estos convenios permiten que las empresas conozcan la condición del nuevo trabajador, y estas empresas pueden acceder a beneficios económicos que brinda el Estado (Sepúlveda, 2014).

Los trabajos que los excombatientes obtienen dependen en un primer momento de la demanda laboral, es decir, de los puestos de trabajo disponibles acordes con sus competencias y su formación, y, como se evidenció en el gráfico 5, solo el 29,9% de la población es bachiller, lo que dificulta desde el comienzo su acceso al mercado laboral formal.

VINCULACIÓN LABORAL

La ACR ha analizado los posibles oficios y perfiles en los que el desmovilizado podría trabajar teniendo en cuenta sus habilidades e intereses y de acuerdo con la realidad del mercado de trabajo colombiano. La vinculación laboral se realiza a partir de la capacitación y orientación al desmovilizado para que él mismo busque y alcance un pue-

to de trabajo; la ACR sirve como ente mediador entre el sector real (la empresa) y el desmovilizado.

En esta etapa, el participante del proceso recibe un subsidio económico¹⁹, que busca asegurar una vivienda digna no solo al desmovilizado, sino también a su familia. Sin embargo, para acceder a tal subsidio, el beneficiario debe cumplir con una serie de requisitos entre los que destaca el «acreditar el pago en calidad de cotizante al sistema de seguridad social en salud de al menos ocho (8) meses, durante los últimos doce (12) meses a la solicitud» (Agencia Colombiana para la Reintegración, 2013).

Llama la atención este tipo de requisitos, toda vez que implica que el beneficiario haya pasado por un periodo exitoso en esta misma etapa; preocupan más aún entonces las altas cifras en informalidad en el mercado laboral colombiano, las cuales se hacen extensivas a esta población.

Las empresas vinculadas al proceso, en un comienzo, vinculan a los participantes en sus empleos a través de prácticas o pasantías con contratos de aprendizaje, que son apoyados por el SENA. Tales empresas reciben en contraprestación por parte del Estado reducciones impositivas y aportes parafiscales contemplados en la Ley 1429 de 2010. Además, el Estado colombiano, a través de la Agencia Colombiana para la Reintegración, ha brindado una serie de incentivos tributarios y no tributarios con los que busca reducir las disparidades económicas que existen en las zonas víctimas de la violencia, tales como:

1. Relocalización empresarial a través de un régimen de tributación especial en las zonas más afectadas por el conflicto.
2. Desarrollo de tejido social a través de becas de inclusión y promoción del ahorro para la vejez a través de beneficios económicos periódicos (BEPS).

De acuerdo con Gómez López y Lesmes Romero (2017), quienes realizaron una encuesta a cien empresarios en la ciudad de Bogotá con el fin de analizar los factores que influyen en la posibilidad de contratar un individuo desmovilizado, encontró que el 83 % de los empresarios encuestados están de acuerdo con el proceso de reincorporación laboral planteado por el Gobierno, sin que necesariamente estén dispuestos a contratarlos. Por su parte, el 11 % manifiesta estar en desacuerdo con la incorporación a la sociedad de los excombatientes bajo las condiciones que el Estado ha planteado, por lo que se encuentran dispuestos a contratar a esta población. Otra de las conclusiones del

¹⁹ Decreto 1391 de 2011: «Estímulo económico a la empleabilidad».

estudio permitió evidenciar que el 39% de los empresarios prefieren contratar a desmovilizados, pero sin poner en evidencia su condición por temor al señalamiento, rechazo y discriminación por parte de sus compañeros.

Por lo anterior, las estrategias contempladas por el Estado colombiano por sí solas no logran cambiar del todo la percepción que puedan tener los empresarios o los demás empleados en un sector específico sobre la confianza que pudieran generar en las relaciones con los reintegrados. Suele existir miedo frente al interrelacionamiento con ellos, así como la posibilidad de que estos sufran de estrés postraumático o de que fortalezcan redes de colaboración con otros excombatientes en el interior de las empresas.

Atender estas problemáticas es un aspecto vital en la construcción de paz, ya que, como se señalaba al inicio de este artículo, esta debería incluir soluciones a los tipos de violencia estructural y cultural. Así, el acceso a empleo, vivienda y educación en efecto brinda una alternativa a las condiciones estructurales de pobreza y desempoderamiento que han profundizado el conflicto armado, atacando de manera especial a la población rural, menos educada y más pobre de Colombia, a la que pertenece buena parte de la población combatiente y excombatiente.

Es por tal razón que la ruta de reintegración incluye las ocho dimensiones anteriormente señaladas en la tabla 2, en las cuales se ha hecho énfasis en educación y productividad, las cuales propenden a la generación de otro tipo de capacidades, incluidas las familiares y sociales en los beneficiarios, de manera que cuenten con las herramientas adecuadas para dar una solución asertiva a los señalamientos y demás tipos de situaciones que pueden poner en riesgo el éxito de su inclusión laboral.

Vale la pena señalar que, en la medida en que estos programas no incluyan espacios que propicien la aceptación de los excombatientes por parte de la sociedad en sus diferentes ámbitos, el éxito de los mismos será limitado, toda vez que esta es una población vulnerable y que permanecerá como tal. Mientras no se rompan los condicionamientos estructurales de vulnerabilidad tales como los bajos niveles de educación y el difícil acceso a empleos formales, esta población continuará sufriendo las consecuencias de una vulnerabilidad que tiende a convertirse en intergeneracional.

CREACIÓN DE PLAN DE NEGOCIO

En Colombia la formación de empresa es baja, por lo tanto es uno de los mayores logros de un desmovilizado, ya que no solo aportaría directamente a la producción nacional, sino que le permitiría apoyar a otros participantes del proceso por medio de la generación de puestos de trabajo dentro de su empresa.

Para que un excombatiente lleve a cabo un plan de negocio debe cumplir con los requisitos de formación para el trabajo y formación empresarial en su proceso ya culminado, y demostrar algunos atributos psicosociales que le permitan una estabilidad profesional y emocional en la ejecución de su proyecto (Sepúlveda, 2014).

Para los pocos excombatientes que cumplen con las condiciones que se mencionaron en el párrafo anterior, el Estado colombiano brinda dos tipos de apoyo; por un lado, un apoyo legal y económico, y, por otro, un apoyo de carácter técnico.

El primero, a partir de la Ley 1429 de 2010 del Ministerio de Trabajo (ley de Formalización y Generación de Empleo y, en particular, el Decreto 1391 de 2011) se reglamentan los subsidios o beneficios económicos para este fin particular.

En la ley 1429 se destaca que el interés es apoyar a los pequeños empresarios para que sus empresas sean formales, es decir, legalmente constituidas, para lo cual durante los dos primeros años los hace exentos de impuesto de renta, el tercer año pagan un 25 %, el cuarto un 50 %, el quinto un 75 % y es solo a partir del sexto año que pagan la totalidad del impuesto correspondiente a renta. En igual medida, el pago de impuesto de industria y comercio, los pagos de parafiscales y otras contribuciones de nómina se hacen progresivas hasta el sexto año.

El monto de capital semilla que se brinda, de acuerdo con el Decreto 128 de 2003, es de máximo ocho millones de pesos, que, comparado con los créditos a microempresarios de cualquier sector del fondo *Emprender*²⁰ del Servicio Nacional de Empleo SENA, es del doble (4 millones es en promedio). Los futuros microempresarios pueden invertir este dinero en emprendimiento, si es el caso de nuevo negocio, o en fortalecimiento, para aquellos que ya lleven un año con su negocio produciendo (SENA, 2017).

El segundo apoyo que brinda el Estado colombiano es el técnico, ya mencionado anteriormente, donde las empresas grandes que tienen convenios con la ACR²¹ brindan capacitación y asesoría a los emprendedores. En este sentido, se creó el programa *Aportando Tiempo*, en el que las empresas vinculadas delegan profesionales en temas de administración y gerencia para que los capaciten. Sin embargo, son muy pocas las empresas que se han vinculado al proceso, por lo que los excombatientes fácilmente desisten de sus intereses y terminan empleándose en lo que les es posible o integrándose a nuevos grupos fuera del margen de la ley en casos extremos.

²⁰ El fondo *Emprender* es un fondo de capital semilla creado por el Gobierno nacional colombiano en el artículo 40 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002: «por la cual se dictan normas para apoyar el empleo y ampliar la protección social y se modifican algunos artículos del Código Sustantivo de Trabajo».

²¹ Agencia Colombiana para la Reintegración.

Por otra parte, si bien existe un apoyo técnico, este no reemplaza la experiencia de quien ha hecho un tránsito en el sector empresarial a manera de entrenamiento. Sería útil el complementar esta estrategia con apadrinamientos de empresas privadas que, desde la responsabilidad social, pudiera realizar una transferencia de conocimiento a pequeños empresarios, excombatientes o no. Además, se requiere generar una transformación en la subjetividad de estos individuos, la cual les permita la toma de decisiones de manera autónoma y propositiva, rompiendo con la sumisión propia de las estructuras jerárquicas de la guerra, que, sobra decirlo, para nada contribuye al espíritu empresarial.

CONCLUSIONES

Colombia, después de atravesar por un conflicto de larga duración, ha logrado grandes avances en los procesos de retorno a la vida civil de los antiguos excombatientes: las estrategias de reintegración que se plantean en la actualidad superan los límites estrictamente jurídicos que permitían la dejación de armas, para garantizar una ruta que permita la vinculación de los excombatientes a la sociedad.

Tal cambio conceptual es tangible en las instituciones públicas que promueven estrategias en las que se transforma la subjetividad del individuo, la relación con su grupo familiar, la corresponsabilidad como ciudadanos y la promoción de capacidades que, como la educación y la productividad, aseguran un proceso en el mediano plazo y posibilita un nivel de autonomía suficiente como para poder agenciar su propio desarrollo sin depender de manera permanente de las ayudas del Estado.

Aun así, resulta preocupante que quienes se han beneficiado de tales programas desde 2003, los que son en mayoría excombatientes de los grupos paramilitares, no hayan culminado de manera masiva su proceso de reintegración, al encontrarse altas cifras de deserción de estos procesos. Se destaca la dificultad para superar los estigmas de los reintegrados, dados la alta desconfianza de sectores de la sociedad civil.

Por otra parte, existen fallas estructurales en los programas implementados, toda vez que los programas de capacitación laboral ofrecidos por el SENA encuentran un techo en la educación técnica, y en muchos casos se limita a la certificación de competencias que permite a los beneficiarios de tales programas acceder a empleos en el nivel operativo. Al ser este nivel de muy baja remuneración en el país, el acceso a empleo no se constituye como una alternativa a la pobreza estructural ni al conflicto armado *per se*. Por lo anterior, se identifica la necesidad de un mayor acompañamiento por parte de las instituciones del Estado, así como de seguimiento a mediano plazo.

Estas dos realidades se suman al hecho de que la mayoría de los excombatientes que participan de la ruta de reintegración se encuentran entre los 26 y los 40 años de edad, siendo población joven, sin experiencia ni educación avanzada, lo que dificulta aún más su empleabilidad en el sector formal. Se refuerzan así las tendencias de informalidad que atacan a la misma población que no ha participado en las confrontaciones armadas.

Así las cosas, las alternativas que se están planteando como ruta de reintegración estarían atacando las condiciones de violencia cultural desde el mismo excombatiente y sus familias, pero no necesariamente en el concierto e interacción con la sociedad receptora. Peor aún, no estarían atacando de manera sostenible las condiciones de violencia estructural que dieron en un primer momento origen al conflicto armado colombiano.

Siguiendo la teoría de Galtung, al no atacar de manera contundente las condiciones de violencia estructural y cultural, no se está más que paliando de manera temporal las consecuencias de la violencia directa, y contrario a los deseos de la sociedad colombiana y de la comunidad internacional, no se estarían brindando las condiciones requeridas para alcanzar una paz sostenible.

Es importante destacar los logros del más reciente proceso de paz llevado a cabo por el actual presidente y Premio Nobel de la Paz Juan Manuel Santos, en lo que concierne a la desmovilización de combatientes y la entrega de armas. Igualmente, el cambio de enfoque en las políticas de reintegración de los excombatientes y, en particular, la vinculación de grandes empresas en la generación de empleo a esta población y sus familias.

Finalmente, el verdadero reto de los procesos de desmovilización se encuentra en su fase de implementación, y es precisamente a través de la inclusión laboral que los combatientes pueden crecer como individuos y encontrar un espacio en el que puedan aportar a la sociedad, de manera digna y con igualdad de derechos y deberes.

REFERENCIAS

- Gómez López, C. A. y Lesmes Romero, A. L. (1 de mayo de 2017). *Reintegración Laboral de los desmovilizados*. «Diagnóstico a empresarios». Universidad Católica de Colombia. Bogotá.
- Agencia Colombiana para la Reintegración, ACR (1 de enero de 2013).
- Agencia Colombiana para la Reintegración. (2016). *Anuario estadístico*. Bogotá: ACR.
- Agencia Colombiana para la Reintegración. (2016). *Anuario estadístico*. ACR.
- Agencia Colombiana para la Reintegración. (1 de enero de 2017). ACR. Recuperado el 1 de abril de 2017, de <http://www.reintegracion.gov.co/es/la-reintegracion/Paginas/cifras.aspx>

- Agencia Colombiana para la Reintegración. (2017). *Preguntas y respuestas sobre la dimensión productiva*. Bogotá: ACR.
- Alonso, M. y Valencia, G. (2008). *Balance del proceso de Desmovilización, Desarme y Reinserción (DDR) de los bloques Cacique Nutibara y Héroes de Granada en la ciudad de Medellín*. Medellín: Universidad de Antioquia.
- Alta Consejería para el Posconflicto. (6 de diciembre de 2017). Obtenido de <http://especiales.presidencia.gov.co/Documents/20161201-rendicion-cuentas-posconflicto/rendicion-cuentas.html>
- Calderon Concha, P. (2009). *Teoría de los conflictos de Johan Galtung*. *Revista de paz y conflictos* (2), 3-23.
- Chernick, M. (diciembre de 1996). *Aprender del pasado: breve historia de los procesos de paz en Colombia (1982-1996)*. *Colombia Internacional*, 4-8.
- Contraloría General de la República. (2014). *Análisis del desarme, desmovilización y reinserción (DDR) en Colombia 2006 - 2014*. Bogotá: Contraloría General de la República.
- Departamento Nacional de Planeación. (2 de abril de 2016). DNP. Recuperado el 15 de abril de 2017, de <https://www.dnp.gov.co/Paginas/Ranking-de-las-ciudades-con-mayor-desempleo-juvenil.aspx>
- Galtung, J. (2001). «After violence, reconstruction, reconciliation and resolution». *Reconciliation, justice and coexistence: Theory and practice*, 3-23.
- Giraldo, J. (2010). «Aportes sobre el origen del conflicto armado en Colombia. Su persistencia e impactos». *Centro de memoria histórica*, 44.
- GMH. (2013). *¡Basta Ya! Colombia: memorias de guerra y dignidad*. Grupo de Memoria Histórica. Bogotá: Centro Nacional de Memoria Histórica.
- Ministerio de Educación Nacional. (2010). *Articulación de la educación con el mundo productivo*. Bogotá: MEN.
- Ministerio de Educación Nacional. (31 de abril de 2014). *Ministerio de Educación Nacional*. Recuperado el 1 de abril de 2017, de MEN: <http://www.mineducacion.gov.co/sistemasdeinformacion/1735/w3-article-212301.html>
- Ministerio de Protección Social. (2010). *Evaluación del PIB y la inflación en Colombia 2000-2009*. Bogotá: Ministerio de Protección Social.
- Montealegre, M. A. y Ochoa, D. H. (2005). *El comportamiento de la inflación en Colombia durante el período 1955 y 2004*. ICESI.
- Moser, C. (1999). *La violencia en Colombia: cómo construir una paz sostenible y fortalecer el capital social*. Banco Mundial, Bogotá.
- Naeve, K. (2012). *Derecho, Deber o Privilegio*. Bogotá: ACR.

- Pardo Rueda, R. (2008). *La historia de las guerras. Desde la conquista hasta nuestros días, una crónica completa de las guerras en Colombia. La búsqueda de la paz desde el conocimiento de la guerra*. Bogotá D. C: Zeta.
- Romero, J. y Gardeazábal, J. (10 de noviembre de 2010). *Evolución y antecedentes históricos de la reintegración en Colombia*. *Seguridad y defensa*, 5 (2), 11-19.
- SENA. (1 de enero de 2017). Recuperado el 1 de abril de 2017, de SENA: <http://www.fondoemprender.com/SitePages/NecesitaCapitalSemilla.aspx>
- Sepúlveda, J. E. (2014). *La vinculación laboral: generación de empleo para desmovilizados*. Cali: Universidad del Valle.
- Theidon, M. (2003). «Disarming the Subject: Remembering war and imaginig citizenship in Perú». *Cultural Critique*, 54, 67-87.
- Villarraga, A. (enero-abril de 2013). «Experiencias históricas recientes de reintegración de excombatientes en Colombia». *Colombia Internacional* (140), 107-140.